

MINISTERIO PÚBLICO C/ JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ.

RIT 375-2022

RUC 2000329302-6

DELITO: RECEPCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Individualización del tribunal, de los intervinientes y de la causa.* Que con fecha 14 de diciembre de 2021, ante esta Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por la Juez Presidente de Sala don **JORGE CANDIA BURGOS**, y por los magistrados doña **ALEJANDRA ROSAS LAGOS** y don **MARCELO ANDRÉS ROJAS ARENAS**, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral **RIT 375-2022**, seguido en contra del acusado **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, cédula de identidad número 20.552.112-7, nacido en Santiago el 20 de diciembre de 2000, chileno, 22 años, soltero, estudiante, domiciliado en calle Pedro Riveros N°1.500, comuna de Quilicura, Santiago, representado legalmente por el abogado defensor penal privado, don **VÍCTOR GOTTSHALD SCHARMANN**, con domicilio y forma de notificación ya registrados en el tribunal; sosteniendo la acusación en el presente juicio, el fiscal del Ministerio Público, don **PATRICIA FUENTES MONTECINOS**, con domicilio y forma de notificación ya registrados en el tribunal.

SEGUNDO: Que, en su acusación, el Ministerio Público sostuvo que:

“El día 21 de marzo de 2020, aproximadamente a las 21:00 horas, en circunstancias que la víctima don Juan Villada Palacio se encontraba conduciendo el vehículo marca Kia, modelo Río, color plateado PPU KPTY-45 como conductor de la aplicación Cabify, sus servicios fueron requeridos por el imputado ya condenado, Sebastián Cid Dendal y un sujeto no identificado, quienes le pidieron que los trasladara hasta la comuna de Quilicura, sentándose como copiloto Sebastián Cid, mientras que el otro sujeto se sentó tras el asiento del conductor, y al llegar frente al N° 222 de la calle Las Torres, en la comuna de Quilicura, el imputado Sebastián Cid toma el freno de mano del vehículo y detiene de manera brusca el movimiento del mismo, al tiempo que sacaba de entre sus vestimentas un arma con apariencia de ser de fuego con la cual intimidó a la víctima colocándosela a la altura de la cabeza, mientras que el sujeto no identificado colocaba igualmente un arma con apariencia de ser fuego a la altura de las costillas de la víctima, manifestándole a la víctima “bájate concha tu madre o te pego un tiro”, ante lo cual la víctima se vio obligada a descender del vehículo, a bordo del cual se dio a la fuga el imputado Cid y el sujeto no identificado.

El día 28 de Marzo de 2020, a las 15:50 horas, aproximadamente, en Avenida El Salto con Avenida Américo Vespucio en la comuna de Huechuraba, personal de carabineros sorprendió al acusado JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ y al imputado ya condenado en esta causa Sebastián Cid Dendal manteniendo en su poder, específicamente viajando a bordo del vehículo PPU KPTY-45, vehículo conducido por el acusado Jordano Soto Ramírez mientras que el imputado condenado Cid Dendal viajaba como copiloto, vehículo que mantenía encargo vigente por robo con intimidación N° 5313-03-2020, según denuncia de fecha 21 de Marzo de 2020,

interpuesta ante la 49ª Comisaría de Quilicura, por la víctima don JUAN VILLADA PALACIO, conociendo o no pudiendo menos que conocer el acusado Soto Ramírez el origen ilícito del mencionado vehículo, dado que el imputado Cid Dendal participó en el referido robo del vehículo y que éste mantenía las placas patentes KKRW-52, correspondientes a otro vehículo y que además eran falsificadas.

Asimismo en la puerta del conductor del referido vehículo, personal policial encontró 6 municiones calibre .38 mm, 5 de ellas marca CBC y 1 marca S&B, mientras que en poder del acusado Jordano Soto, específicamente entre sus vestimentas, carabineros encontró un arma de fuego, específicamente 01 revolver marca Taurus, serie N° KC426321, calibre .38 especial, con seis municiones calibre .38 marca CBC en su interior, arma y municiones que se encontraban aptas para el disparo y sin que el acusado mantuviera autorización para el porte o tenencia de las mismas”.

A juicio de la Fiscalía los hechos descritos son constitutivos de los delitos de **receptación de vehículo motorizado**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A INC.3° del Código Penal, el que se encuentra en grado de desarrollo **consumado**; y **Porte ilegal de arma de fuego**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 9° en relación al artículo 2°, ambos de la ley 17.798, delito que se encuentra en grado de desarrollo **consumado**. Atribuyéndose, en ambos, al acusado, participación en calidad de **autor** del art.15 N°1 del Código Penal, sin invocarse circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

El Ministerio Público requiere se imponga al acusado, **JOSÉ IGNACIO ARAVENA JARA**, la pena de: **a) 5 años de presidio menor en su grado máximo**, multa de 20 UTM, más accesorias del artículo 29 del Código Penal, por el delito de **receptación de vehículo motorizado**, **b) 5 años de presidio menor en su grado máximo**, más accesorias del artículo 29 del Código Penal, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Asimismo, se solicita el pago de las costas de la causa, según lo prescrito en los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal y el comiso de las especies incautadas.

TERCERO: Alegatos de apertura y clausura de los Intervinientes.

Que, en su **alegato de apertura**, el Ministerio Público, no incorporó antecedentes distintos que los contenidos en su acusación, limitándose a señalar que lograría acreditarlos, mediante la prueba que se produciría en juicio. En tanto que, **en su alegato de clausura**, estimó que se han acreditado los hechos en que se funda la acusación en contra de Jordano Soto Ramírez. Se ha cuestionado el elemento subjetivo del delito de receptación, sin embargo, uniéndose las declaraciones de los testigos y las circunstancias del delito, permiten forjar convicción condenatoria por la receptación de vehículo motorizado. Además, al momento de su detención, lo acompañaba uno de los autores del delito de robo con intimidación a la víctima del día 21 de marzo de 2020. El acusado dice que desconocía todo antecedente, pero el auto se lo habría entregado Sebastián. Sin embargo, dijo a los testigos, que el vehículo era de un familiar, o de su madre. No portaba licencia de conducir, intenta eludir el control policial, según lo relatado por la funcionaria Valeska Garrido Gutiérrez, efectuando una maniobra de tránsito contra el sentido del tránsito, cuestión que detonó una persecución, detención y fiscalización del vehículo. Además, se encuentra en el bolsillo de la puerta del conductor, municiones. Lo que dijo el acusado, se constituye en simples aseveraciones, el hecho de justificar el porte de un arma para su defensa, porque le habían disparado en su oportunidad. No se cuestiona que el vehículo no haya tenido daños, pero esto se debe a que el robo se produjo con intimidación, donde

no hace falta dañar el vehículo. No basta con indicar que se desconoce el origen del automóvil, debe considerarse las circunstancias de comisión del delito. Tampoco se presentó a Sebastián Cid Denal, como testigo para reforzar la explicación del acusado sobre su desconocimiento del origen ilícito del mismo.

En su **alegato de apertura**, la defensa del acusado, solicitó la absolución de su representado por insuficiencia probatoria respecto al elemento subjetivo del tipo de receptación. Sobre el porte ilegal de arma, reconocerá su participación en este delito, declarando como medio de defensa. En tanto que, **en su alegato de clausura**, señaló que no basta lo referido en la acusación entorno a la vinculación entre Sebastián Cid Denal y Jordano Soto Ramírez. Así, el ente persecutor intenta en juicio sumar situaciones para incriminar a su representado. Las características del vehículo, esto es, no tener daños, y otras cuestiones relacionadas al sello verde, la patente o el material de la patente, solo son observables conforme a la experticia de los funcionarios policiales. Se debe recordar que, al exhibirle los funcionarios policiales las placas institucionales, se detuvo y se sometió a la fiscalización que derivó en su detención. Se solicita absolución por la receptación.

CUARTO: *Declaración del acusado como medio de defensa.*

Advertido de sus derechos, renunciando a guardar silencio, y exhortado, a decir verdad, el acusado **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, prestó declaración como medio de defensa, constando ésta, de manera fiel, conforme a los artículos 39 y siguientes del Código Procesal Penal, en audio de fecha 20 de diciembre de 2022; expresando en síntesis y en lo pertinente que, quedó con el Sebastián para ir a una fiesta. Le pasó las llaves del auto y partieron. Estaban con el grupo de personas con los que estaban en la fiesta. Los controlaron los carabineros, le pidieron los papeles. Los registraron y le encontraron una pistola que le pasó un amigo para defenderse porque tenía problemas en la población y le habían pegado un tiro.

A su defensa dijo que, no le llamó la atención el auto y no pensó que era robado. La familia de su amigo tiene buena situación, y nunca pensó que era robado. Sebastián estaba sacando su licencia así que le pidió que manejara él. Esto fue como a las 15.00 horas. La fiesta fue en Huechuraba. Andaba con el arma para defensa, le habían pegado.

QUINTO: *Prueba incorporada durante el juicio oral.* Que, a fin de acreditar los hechos contenidos en la acusación fiscal y la participación del acusado en ellos, la fiscalía incorporó durante la audiencia de juicio oral, los siguientes medios de prueba:

A) PRUEBA TESTIMONIAL: Consistente en las declaraciones de los siguientes testigos, previamente individualizados, en su caso, previo juramento o promesa de decir verdad, todo ello al tenor de lo dispuesto en los artículos 306, 309 y 329 del Código Procesal Penal, constando de manera fiel conforme a los artículos 39 y siguientes del Código Procesal Penal, en audio de fecha 20 de diciembre de 2022.

Se mantuvo, seguido al orden en que se presentaron los testigos, el número con que figuran en el auto de apertura.

T1) 5. LUIS HERNÁN GONZALEZ VELOSO, cabo 1° de Carabineros de Chile, quien en síntesis y en lo pertinente dijo que, adoptó una denuncia referente a un robo con intimidación a un vehículo motorizado. El día 21

de marzo de 2020, estaba de guardia, siendo las 22.30 horas se presentó una persona de nombre Juan Carlos Villada Palacios, de nacionalidad colombiana, quien dijo que a las 21.30 horas, conducía su vehículo trabajando para la aplicación Cabify, Kia, Rio, patente, KPTY45. Abordaron el vehículo dos sujetos en la Avda. Las Torres, y al llegar al #222. Uno en el asiento del copiloto y otro detrás. Éste, pone el freno de mano y ambos sacan una pistola intimidándolo, poniéndosela uno de ellos en las costillas. El copiloto lo hace descender del vehículo amenazándolo con dispararle. El copiloto se pasa al asiento del piloto, huyendo. Le roban además un teléfono celular Samsung. Hace el encargo por robo 513/2020 en el SERBV.

A la defensa dijo que, no se denunciaron daños al vehículo, mientras lo robaban.

T2) 2. FRANCISCO ANDRES ALVIAL NEIRA, sargento 1° de Carabineros de Chile, quien en síntesis y en lo pertinente dijo que, el año 2020 pertenecía a la SIP de la 37 Comisaría de Vitacura. El 28 de marzo de 2020, vieron un auto Kia realizando un desplazamiento por una rotonda en Huechuraba, contra el tránsito. Lo siguieron con la finalidad de controlarlo. Una vez alcanzado y solicitado los documentos, se percataron que el logo verde mantenía una patente distinta a la que figuraban en los documentos. Al registro, Valeska, se percató que había unas municiones en el bolsillo del vehículo del lado del conductor. Conducía Jordano Soto Ramírez, quien a su registro por parte de Valeska, se le encontró un revólver en la pretina de su pantalón. Era acompañado de Sebastián Cid Dental, quien a su registro, por su parte, le encontró 3 papelines de sustancia de color transparente.

La placa patente delantera estaba impresa en un material ligero, modificada con tinta y huincha. La patente trasera no tenía relieve, se solicitó un peritaje especializado.

Se le fiscalizó por transitar por la calle en pandemia y circular contra el tránsito, evitando, a su juicio, su presencia pese a que andaban de civil.

Las placas patentes portadas eran las KKRW52, pero el logo verde del parabrisas era la KPTY45, con encargo vigente por robo con intimidación, denuncia efectuada en la 49 comisaría de Quilicura, no recuerda fecha.

El conductor le entregó unos documentos, pero no tenía su licencia de conducir, que una vez chequeados con el número de chasis del parabrisas, no correspondía al de la patente que portaba. La Revisión Técnica, les sirvió para realizar la consulta a la página de

Sebastián Andrés Cid Dental, era el copiloto, y él lo fiscalizó. Valeska fiscalizó al conductor, Jordano Andrés Soto Ramírez.

Se incorpora como Otros Medios:

1. Set fotográfico compuesto de 5 imágenes que muestran al vehículo marca Kia objeto de esta acusación, patentes que portaba y su documentación. De las que se exhibieron y comentaron:

1) Se trata del vehículo fiscalizado el 3 de marzo de 2020, con placa KKRW52 3) Documentación facilitada por el conductor al momento de su fiscalización.

El chofer dijo que el vehículo correspondía a un familiar y que desconocía cualquier otro antecedente.

A la defensa dijo que, la patente estaba falsificada. Se percató una vez periciada. A simple vista el sello verde era lo que no correspondía con la patente portada, por su número de chasis. Por su experiencia, le llamó la atención las características de las patentes portadas. El vehículo se encontraba en buenas condiciones sin daños en su cerradura. El conductor estaba nervioso durante el control, con una actitud rara, ocultando ciertas actitudes. No intentó darse a la fuga.

T3) 3. VALESKA ANTONIETA GARRIDO GUTIERREZ, cabo 1° de la SIP de Vitacura de Carabineros de Chile, quien en síntesis y en lo pertinente dijo que, estaban en la rotonda de la Pirámide, ella de conductora, realizando fiscalizaciones por salvoconductos en Pandemia. En el Barrero, límite de Vitacura con Huechuraba, observaron que un Kia, Río, KKRW52, hizo una maniobra contra el tránsito, razón por la que lo siguieron para fiscalizarlos en el Salto con Américo Vespucio. Su sargento Francisco Alvial Neira, por el lado del copiloto les hizo gestos de que se detuvieran, exhibiendo su placa de servicio.

Descendieron y procedieron a la fiscalización del conductor Jordano Soto Ramírez. Entregó documentación sin la licencia del conductor. En el parabrisas delantero, donde estaba adosado el sello verde, se pudo observar una patente distinta de la que aparecía en los documentos, la KPTY45, que tenía encargo por robo con intimidación, denunciado por Juan Villada Palacio.

Les practicaron un control de identidad y registro. Estaba junto a Sebastián Cid Dental. En ese momento se pudo percatar que había unas municiones en una hendidura del apoya brazos de la puerta. Registró al conductor y en el cinto del pantalón portaba un revolver .38 marca Taurus, con 6 municiones en su interior. El sargento Alvial, registró a Sebastián, y le encontró 3 papelines de apariencia de pasta base. En la 37 comisaría de Vitacura, hicieron una inspección del vehículo, y por el número de chasis, correspondía a la patente del automóvil encargado por robo.

Al momento de la fiscalización se habían percatado de que las patentes no serían legítimas, cuestión que después comprobaron con una revisión exhaustiva y peritaje. Patentes de distinto materias, modificadas con huincha y pintura, sin sellos del registro civil.

Al ser fiscalizado, dijo que el vehículo era de su madre, respecto de quien dijo un nombre distinto del que figuraba en la documentación. Siempre observan el sello verde, no suelen cambiarlo pese a una clonación.

El arma incautada, se apreciaba apta para el disparo, marca Taurus .38, mango café.

Se incorpora como Otros Medios:

2. Set fotográfico compuesto de 8 imágenes que muestran arma y munición incautada.

1) Se exhibe el revólver que levantó con cadena de custodia NUE 4111925 2) Con NUE 4111927 puede observar que se trata de las municiones al interior del revólver (6) y las que observó a un costado del conductor al momento de fiscalización (6), 5 marca CBC y 1 S&B.

T4) 4. IGNACIO RAÚL ALBORNOZ CONTRERAS, cabo 1° de la SIP de Recoleta de Carabineros de Chile, quien en síntesis y en lo pertinente dijo que, el 07 de abril de 2020 se le encomendó realizar unas diligencias

ordenadas por la fiscalía centro norte. Ubicar a una víctima de robo con intimidación y exhibir un set de reconocimiento que contenía fotos de Jordano Soto Ramírez y Sebastián Cid Dental, hizo las diligencias el 07 de junio de 2020. Ubicó a Juan Villada Palacios, extranjero, víctima del delito de robo con intimidación.

Después de su declaración explicando la dinámica del delito, se le exhibió un set en que reconoce en el #10 a **Sebastián Cid Dental**, como quien le puso la pistola en las costillas e iba de copiloto.

T5) JUAN CARLOS VILLADA PALACIOS, víctima, quien en síntesis y en lo pertinente dijo que, el 22 de marzo de 2020, un día sábado realizaba labores como conductor de Cabify. Le salió un servicio en que tomó a dos pasajeros que lo asaltaron, le pusieron una pistola y lo bajaron. Tenía un KIA, patente, KPTY45. Llegando a Quilicura, el copiloto acciona el freno de mano, y ambos los amenazan con pistolas. Al de adelante lo reconoció. Le sustrajeron unas 70 mil, su celular y el vehículo. Después, se dirigió a carabineros para hacer la denuncia en la comisaría de Quilicura. El vehículo apareció varios días después, en la comisaría de Vitacura. Fueron para allá, el vehículo lo habían chocado y tenía una chaqueta del tipo que iba adelante. Su esposa se llama Sandra Patricia Correa Arias. Habían comprado el vehículo en el año 2018. Estaba con una luz rota, el parachoques dañado, el radiador en mal estado. No pudo seguir trabajando, entraron en pandemia. No podía transitar en él sin antes hacerle reparaciones.

B) PRUEBA PERICIAL: Consistente en la declaración del perito que se indicará a continuación, previamente juramento de decir verdad, todo ello al tenor de lo dispuesto en los artículos 306, 309 y 329 del Código Procesal Penal, constando de manera fiel conforme a los artículos 39 y siguientes del Código Procesal Penal, en audio de fecha 20 de diciembre de 2020.

P1) 1. JUAN PAILLALEF MILLANO, Perito Armero, Sargento 2° de Carabineros, quien depuso al tenor del informe pericial **N° 4037-2020**, de fecha 09 de junio de 2020, y quien en síntesis y en lo pertinente dijo que, le correspondió efectuar la pericia sobre estado de conservación y aptitud de disparo de las evidencias acompañadas **NUE 4111925** consistente en un revolver marca Taurus, modelo 82S calibre .38, de fabricación brasileña, número de serie KC 42621 AF1.

Se trata de un revólver en mal estado de conservación por su oxidación, sin embargo, su funcionamiento mecánico era normal, lo que se verificó disparando los cartuchos rotulados de C1 a C12, no estaba inscrita, ni presentaba encargo.

También municiones **NUE 4111927**, calibre .38, especial, marca CBC, caratulados C1 a C12, aptos para el disparo comprobado mediante la operación descrita.

C) DOCUMENTAL: Consistente en los documentos que se indicarán a continuación, incorporados mediante lectura resumida por el fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 333 del Código Procesal Penal:

1. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo PPU **KPTY-45**, propietario **Sandra Patricia Correa Arias**.

2. Copia de encargo vigente N° 5513-03-2020 relativo al vehículo PPU **KPTY-45**, nombre del denunciante **Juan Carlos Villada Palacios**, propietario **Sandra Patricia Correa Arias**.

3. Informe de la Dirección General de Movilización Nacional N° 6442/1336/2020 de fecha 07-04-2020, que expresa que **Jordano Andrés Soto Ramírez** no registra inscripción de arma de fuego, ni permisos para portarla o portar municiones.

SEXTO: La defensa del acusado, se valió de la prueba del Ministerio Público, y no aportó prueba propia.

SÉPTIMO: *Hechos acreditados y Valoración de la prueba.*

Tal como se refirió en el veredicto de fecha 20 de diciembre de 2022, con la prueba rendida por la fiscalía, referida en el considerando **quinto de este fallo**, valorada conforme lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados; a juicio de este Tribunal, se ha podido establecer lo siguiente:

El día 28 de Marzo de 2020, a las 15:50 horas, aproximadamente, en Avenida El Salto con Avenida Américo Vespucio en la comuna de Huechuraba, personal de carabineros sorprendió a **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, conduciendo el vehículo patente PPU KPTY-45, junto a **Sebastián Cid Dendal**, quien viajaba como copiloto. Dicho vehículo, mantenía encargo vigente por robo con intimidación N° 5313-03-2020, según denuncia de fecha 21 de Marzo de 2020, interpuesta ante la 49ª Comisaría de Quilicura, por la víctima JUAN VILLADA PALACIO, y además, portaba placas patentes falsificadas KKRW-52, correspondientes a otro automóvil. En la puerta del conductor, personal policial encontró 6 municiones calibre .38 mm, 5 de ellas marca CBC y 1 marca S&B, mientras que en poder de **Jordano Soto Ramírez**, entre sus vestimentas, carabineros encontró un revolver marca Taurus, serie N° KC426321, calibre .38 especial, con seis municiones calibre .38 marca CBC en su interior, arma y municiones que se encontraban aptas para el disparo, sin contar con autorización para el porte o tenencia de las mismas.

Los hechos precedentemente consignados, a juicio de estos sentenciadores, respecto del acusado **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, son constitutivos del delito de **Receptación de Vehículo Motorizado**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A inc.3° del Código Penal, y **Porte Ilegal de Arma de Fuego**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 9° en relación al artículo 2°, ambos de la ley 17.798; ambos en grado de desarrollo **consumado**, correspondiéndole participación en calidad de **autor** del art.15 N°1 del Código Penal.

Respecto al delito de porte ilegal de arma de fuego, se tuvo por suficientemente establecido, teniendo en consideración los testimonios de los funcionarios testigos **T2) 2. FRANCISCO ANDRES ALVIAL NEIRA**, sargento 1° de Carabineros de Chile, y **T3) 3. VALESKA ANTONIETA GARRIDO GUTIERREZ**, cabo 1° de la SIP de Vitacura de Carabineros de Chile, quienes el día 28 de marzo de 2020 a las 15.50 horas aproximadamente, les correspondió hacer el seguimiento, detener y controlar al vehículo Kia, Río, conducido por el acusado. A la revisión corporal de Jordano Andrés Soto Ramírez, la funcionaria **Garrido Gutiérrez**, encuentra en la pretina de su pantalón, un revólver marca Taurus, calibre .38 especial con 6 municiones del mismo calibre en su interior, y además, en el bolsillo lateral de la puerta del conductor, otras 6 municiones. Todas estas evidencias, levantadas por la misma carabinera cuya cadena de custodia señaló, indicando su contenido durante su declaración, se hizo al incorporarse como **Otros Medios: 2. Set fotográfico compuesto de 8 imágenes que muestran arma y munición incautada**, manifestando, 1) Se le exhibe el revólver que levantó con cadena de custodia NUE 4111925

2) Con NUE 4111927 puede observar que se trata de las municiones al interior del revólver (6) y las que observó a un costado del conductor al momento de fiscalización (6), 5 marca CBC y 1 S&B.

Cabe consignar que, estas evidencias, fueron periciadas por **P1) 1. JUAN PAILLALEF MILLANO, Perito Armero, Sargento 2° de Carabineros**, quien depuso al tenor del informe pericial **N° 4037-2020**, de fecha 09 de junio de 2020, y quien en síntesis y en lo pertinente dijo que, le correspondió efectuar la pericia sobre estado de conservación y aptitud de disparo de las evidencias acompañadas **NUE 4111925** consistente en un revolver marca Taurus, modelo 82S calibre .38, de fabricación brasileña, número de serie KC 42621, caratulada AF1, como asimismo, a las municiones contenidas en la **NUE 4111927**, calibre .38, especial, marca CBC, caratulados C1 a C12; concluyendo que tanto el arma de fuego, cuanto las municiones, son aptas para el disparo y para ser disparadas.

Finalmente, con la prueba documental acompañada por el ente persecutor, consistente en **3. Informe de la Dirección General de Movilización Nacional N° 6442/1336/2020 de fecha 07-04-2020**, que expresa que **Jordano Andrés Soto Ramírez** no registra inscripción de arma de fuego, ni permisos para portarla o portar municiones, el delito imputado queda claramente comprobado, copándose cada uno de los elementos del tipo para su configuración, en grado de desarrollo de consumado, cabiéndole participación en calidad de autor. A mayor abundamiento, pese a la inequívoca prueba presentada por el Ministerio Público, el propio acusado no desvirtuó su participación en este delito, reconociéndolo en su declaración prestada como medio de defensa.

En cuanto al delito base de la receptación de vehículo motorizado, robo con intimidación, se tuvo por suficientemente acreditado, con el mérito de la declaración del testigo **T5) JUAN CARLOS VILLADA PALACIOS**, quien dijo que, en marzo de 2020, un día sábado, realizando labores como conductor de Cabify, tomó a dos pasajeros que lo asaltaron, le pusieron unas pistolas y lo bajaron. Le sustrajeron el vehículo marca Kia, modelo Río, patente, KPTY45 de su señora **Sandra Patricia Correa Arias**. **Además, con la declaración del testigo T1) 5. LUIS HERNÁN GONZALEZ VELOSO**, cabo 1° de Carabineros de Chile, quien dijo que, adoptó una denuncia referente a un robo con intimidación a un vehículo motorizado, el día 21 de marzo de 2020, cuando estaba de guardia. Se presentó **Juan Carlos Villada Palacios**, de nacionalidad colombiana, quien dijo que a las 21.30 horas, de dicho día, conducía su vehículo trabajando para la aplicación Cabify, Kia, Río, patente, KPTY45, abordándolo dos sujetos en la Avda. Las Torres, y al llegar al #222, ambos lo intimidaron con pistolas, haciéndolo descender, llevándose el vehículo con ellos. Con estos antecedentes, hizo el encargo por robo N° 5313-03-2020, en la 49ª Comisaría de Quilicura. Finalmente, con la prueba documental incorporada como prueba **Documental:** 1. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo PPU **KPTY-45**, propietario **Sandra Patricia Correa Arias**, y 2. Copia de encargo vigente N° 5513-03-2020 relativo al vehículo PPU **KPTY-45**, nombre del denunciante **Juan Carlos Villada Palacios**, propietario **Sandra Patricia Correa Arias**.

De manera que, hasta aquí, se ha asentado que el vehículo encontrado en poder del acusado **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, no le pertenecía, no se relacionaba con él, porque el denunciante y su propietaria fueron despojados de él ilegítimamente, en un robo con intimidación, perpetrado con fecha 21 de marzo de 2020, y no existe evidencia que ella o el denunciante, lo hubiesen cedido a ningún título al acusado o a su acompañante **Sebastián Cid Dendal**, para su uso.

Sobre la tenencia y conducción del vehículo patente verdadera KPTY-45, y falsa KKRW-52.

Pese a que esta circunstancia no ha sido dubitada por **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, ni su defensa, quedó fehacientemente acreditada con la declaración de los testigos **T2) 2. FRANCISCO ANDRES ALVIAL NEIRA**, sargento 1° de Carabineros de Chile, y **T3) 3. VALESKA ANTONIETA GARRIDO GUTIERREZ**, cabo 1° de la SIP de Vitacura de Carabineros de Chile, quienes el día 28 de marzo de 2020 a las 15.50 horas aproximadamente, les correspondió hacer el seguimiento, detener y controlar al vehículo Kia, Río, conducido por el acusado, luego de ser observado en el sector del Barrero, límite de Vitacura con Huechuraba, haciendo una maniobra contra el tránsito en una rotonda.

En cuanto al conocimiento del origen ilícito del vehículo que se tuvo y condujo el acusado, esto es, que era robado, o que a lo menos debiera haberlo sabido, ha podido ser extraído e inferido por estos sentenciadores de los siguientes aspectos surgidos de los elementos probatorios, que unidos, fundan esta convicción.

a) Que habiéndose acreditado la tenencia del automóvil en manos del acusado, éste no dio una explicación razonable para su posesión, **todo lo contrario**, incorporó una versión que se sustenta en su única declaración prestada en juicio, sin acompañamiento de un testimonio de corroboración, como el del aludido **Sebastián Cid Dendal**, quien se lo habría entregado para que lo condujera, por no tener licencia de conducir. Con tal prescindencia, el acusado pretende que esta judicatura adquiriera convicción sobre su desconocimiento del origen ilícito del vehículo, cuando el halo de ilicitud de su actuar se viene configurando desde su reticencia a ser fiscalizado al percatarse de la presencia policial, realizando una maniobra de tránsito antirreglamentaria que describieron sus aprehensores. Luego, en no portar licencia de conducir, cuestión que se contradice con lo relatado sobre que **Sebastián Cid Dendal**, le habría solicitado que él condujera por no contar Cid Dendal este documento.

b) Con la falta de corroboración de la justificación del por qué conducía el vehículo en el que se le sorprendió junto a **Sebastián Cid Dendal**, se refuerza la ausencia de un enlace legítimo en el traspaso de la posesión o tenencia del vehículo robado, siendo irrelevante el buen estado del mismo, cuestión alegada por su defensa, considerando que fue arrebatado mediante actos intimidatorios utilizando armas de fuego, según relató el denunciante y testigo **Juan Carlos Villada Palacios**.

c) Ahora bien, lo dicho precedentemente, una vez que se vinculan las circunstancias concomitantes del delito, **a la tenencia del automóvil**, esto es, que al ser objeto de un control de identidad y a la revisión corporal, se encuentra en la puerta del lado del conductor, seis municiones y en la pretina del pantalón, un revólver con seis municiones en su interior; dejan de ser un cúmulo de circunstancias desafortunadas que pesan contra el acusado y el principio de inocencia, configurando un escenario de ilicitud insoslayable, sin perjuicio del delito autónomo que se verifica con el porte del arma de fuego, en sí.

d) Un preciosismo a tener en consideración, a modo de corolario de la actividad delictual del acusado si, además, se descubre por los funcionarios de carabineros aprehensores y aquel encargado del peritaje técnico del automóvil, que éste portara placas patentes falsas correspondientes a otro vehículo, en el caso sub lite, la KKRW-52.

Con todo, finalmente, puede decirse que el delito de receptación de vehículo motorizado que se ha imputado al acusado, se encuentra agotado, es decir, **consumado**, y que, en él le ha cabido participación en calidad de autor conforme al art.15 N°1 del Código Penal, por haber intervenido en él de manera inmediata y directa.

OCTAVO: Atendido los hechos y razonamientos señalados en el considerando **séptimo** de este fallo, a juicio de este Tribunal, por unanimidad, necesariamente debía condenarse a **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, como autor de los delitos consumados de **Receptación de Vehículo Motorizado**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A inc.3° del Código Penal, y **Porte Ilegal de Arma de Fuego**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 9° en relación al artículo 2°, ambos de la ley 17.798; acaecidos el día 28 de marzo de 2020 en la comuna de Huechuraba, Santiago.

NOVENO: *Audiencia de determinación de la pena.*

Que, en la audiencia de determinación de pena, el **Ministerio Público** incorporó mediante su lectura resumida, copia de la sentencia dictada en causa **Rit N°11.064/2017** por el **2° Juzgado de Garantía de Santiago** con fecha **01 de junio de 2018**, condenándolo como autor del delito consumado de **Robo con Intimidación**, a la sanción de 541 de Libertad Asistida Especial, ejecutoriada el mismo día de su dictación por renuncia de plazos de los intervinientes. Con ello, estima la fiscalía que, no debe ser considerada la atenuante del **art.11 N°6 del Código Penal**, **ni tampoco**, su declaración prestada como medio de defensa, reconociendo el ilícito de porte ilegal de arma de fuego, como una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos conforme a **art.11 N°9 del Código Penal**, debiendo imponerse la pena solicitada en la acusación, accesorias legales que correspondan, comiso de los efectos del delito y pago de las costas de la causa.

Por su parte, **la defensa**, solicitó el reconocimiento de la atenuante del art.11 N°6 del Código Penal, por contener la sentencia dictada una sanción como RPA, que no debe ser considerada en su vida como adulto, y la del art.11 N°9 del Código Penal, colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, con el mérito de su declaración prestada como medio de defensa, en el caso del delito de porte ilegal de arma de fuego. Así las cosas, para este último caso, la rebaja en un grado con ocasión de estas dos atenuantes y ninguna agravante, proponiendo la pena de 541 días de presidio menor en grado medio, y para el caso de la receptación, concurriendo una sola atenuante, la del art.11 N°6 del Código Penal, la de 3 años y 1 día de presidio menor en grado máximo. Todo ello, con la modalidad de cumplimiento de Libertad Vigilada Intensiva, conforme los arts.15 y siguientes de la Ley 18.216, por no existir prohibición para ello con las nuevas modificaciones realizadas a la Ley 18.216 y 17.798, con antecedentes favorables al sentenciado, emanados del informe social acompañado, que hacen aconsejable el cumplimiento de su pena en libertad.

DÉCIMO: *Determinación de la Cuantía Exacta de la Pena, Forma de cumplimiento, Comiso y Costas.*

El Tribunal estimó que la declaración de **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, reconociendo su participación en el delito de porte ilegal de arma de fuego, no constituyó una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, toda vez que sin ella, el Ministerio Público aportó prueba suficiente para su acreditación, bastándose a sí misma. De manera que será desestimada.

Por otra parte, para la mayoría de los jueces del Tribunal, no beneficia al sentenciado la atenuante de irreproachable conducta anterior, dado que según consta de su extracto de filiación y antecedentes, el acusado siendo adolescente cometió un delito de robo con intimidación. Al efecto, aun cuando se ha resuelto sostenidamente que las anotaciones previas no pueden servir de base para sustentar la reincidencia, aquello no implica desconocer la existencia de condenas previas. Por otra parte, aun cuando el régimen de Responsabilidad Penal Adolescente, establece un sistema de penas diversas, en su naturaleza y extensión, aquellas igualmente dan cuenta de un reproche de parte del derecho penal, que impide considerar la conducta previa como exenta de maculas. Siendo así, aún si no consideramos la pena impuesta antes, o la cuestión jurídica de las condenas en sí, por una equivocada aplicación directa, literal y contra ley, de las reglas de Beijing, no podríamos, de todos modos, ignorar la materialidad de los hechos que antes ocurrieron en la vida del acusado, para juzgar su conducta pretérita. Y acontece que ese sentenciado sí cometió un delito grave. Esos sucesos, más allá de sus calificaciones jurídicas, son acciones de la vida real que, por sobre lo que prescriban las diversas reglas jurídicas, enfrentan un serio repudio social y ético, en la comunidad humana actual y particularmente en nuestra sociedad, de forma que no se comprende cómo es que el hechor podría ahora tener conducta no ya buena, sino irreproachable, si en efecto antes delinquiró y lo hizo a una edad en que ya era posible atribuirle, también moral y socialmente, tales hechos.

No concurriendo en consecuencia, atenuantes ni agravantes, que morigeren o acentúen la penalidad para los delitos por los que se condenó al acusado, y teniendo de todas formas a la vista que, se trata de delitos que están sometidos a un tratamiento especial de marco rígido en virtud del art.449 inc.1° del Código Penal, y art.17 B de la Ley 17.798, para la receptación de vehículo motorizado y porte ilegal de arma de fuego, respectivamente, esta judicatura impondrá las penas dentro del rango mínimo establecida para cada uno de ellos, es decir, la de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, las que sumadas como lo dispone el art.1 inciso final de la Ley 18.216, hacen imposible la sustitución de la pena privativa de libertad por sus sustitutivas, superando los 5 años que habilitarían a ello. En consecuencia, estas penas deberán ser cumplidas de manera efectiva, abonándose a ellas el tiempo que el acusado ha permanecido privado de libertad por esta causa, lo que conforme a la certificación del Tribunal de 20 de diciembre de 2022, fue de veintidós (22) días, entre el **28 de marzo de 2020 al 18 de abril de 2020**, fecha esta última en que recuperó su libertad previo pago de una caución **\$ 2.000.0000.-**, debiendo aplicarse tal abono a la de **receptación de vehículo motorizado, que deberá cumplir en primer lugar, conforme al art.74 del Código Penal por considerarse más gravosa, al incorporar una pena de multa.**

La pena de multa asociada al delito de receptación de vehículo motorizado, será rebajada conforme al art.70 del Código penal a **5 UTM**, puesto que la privación de libertad que deviene del cumplimiento efectivo de la pena, le impedirá procurarse de dineros necesarios para el pago de una multa mayor.

Se decreta y ordena el comiso, de la Evidencia Material **NUE 4111925** consistente en un revolver marca Taurus, modelo 82S calibre .38, de fabricación brasileña, número de serie KC 42621, como asimismo, de las municiones contenidas en la **NUE 4111927**, calibre .38, especial, marca CBC y (1) S&B, debiendo obrarse respecto de ellos conforme lo dispone el **art.23 inc.2° de la Ley 17.798**, esto es, como sigue: "Si dichas especies fueren objeto de comiso en virtud de sentencia judicial ejecutoriada, quedarán bajo el control de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, según corresponda, y se procederá a su destrucción".

En cuanto a las costas, conforme al art.47 del Código Procesal Penal, habiendo sido el acusado condenado a cumplir efectivamente su pena corporal, se le presume pobre, eximiéndosele con ello del pago de las costas de la causa.

Le serán impuestas las **penas accesorias del art.29 del Código Penal**, esto es, la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Por estas consideraciones, y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 25, 29, 50, 70, 456 bis A del Código Penal y 449; arts.2 b), 4, 5, 9, 17 b) y 23 de la Ley 17.798; art.1 de la Ley 18.216 y artículos 47, 48, 295, 296, 297, 324, 340, 341, 342 y 344, del Código Procesal Penal, se declara:

I. Que se condena a **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, ya individualizado, como **AUTOR** del delito **CONSUMADO** de **RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A inc.3° del Código Penal, acaecido el día 28 de marzo de 2020, en la comuna de Huechuraba, Santiago; a la pena de **3 (TRES) años y 1 (UN) día**, de presidio menor en su grado máximo, **multa de 5 UTM.**, y a la accesoria del art. 29 del Código Penal, esto es, a la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

II. Que se condena a **JORDANO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, ya individualizado, como **AUTOR** del delito **CONSUMADO** de **PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO**, ilícito previsto y sancionado en el artículo 9° en relación al artículo 2° letra B), ambos de la ley 17.798; acaecidos el día 28 de marzo de 2020 en la comuna de Huechuraba, Santiago, a la pena de **3 (TRES) años y 1 (UN) día**, de presidio menor en su grado máximo, y a la accesoria del art. 29 del Código Penal, esto es, a la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

III. Visto lo razonado **en el considerando décimo de esta sentencia**, las penas impuestas **deberán ser cumplidas de manera efectiva**, abonándose a ellas el tiempo que el acusado ha permanecido privado de libertad por esta causa, lo que conforme a la certificación del Tribunal de 20 de diciembre de 2022, fue de veintidós (**22**) días, entre el **28 de marzo de 2020 al 18 de abril de 2020**, fecha esta última en que recuperó su libertad previo pago de una caución \$ **2.000.0000.-**; debiendo aplicarse tal abono a la de **receptación de vehículo motorizado**, **que deberá cumplir en primer lugar, conforme al art.74 del Código Penal por considerarse más gravosa, al incorporar una pena de multa.**

IV. **Se decreta y ordena el comiso**, de la Evidencia Material **NUE 4111925** consistente en un revolver marca Taurus, modelo 82S calibre .38, de fabricación brasileña, número de serie KC 42621, como asimismo, de las municiones contenidas en la **NUE 4111927**, calibre .38, especial, marca CBC y (1) S&B, debiendo obrarse respecto de ellos conforme lo dispone el **art.23 inc.2° de la Ley 17.798**, esto es, como sigue: "Si dichas especies fueren objeto de comiso en virtud de sentencia judicial ejecutoriada, quedarán bajo el control de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, según corresponda, y se procederá a su destrucción".

V. En cuanto a las costas, conforme al art.47 del Código Procesal Penal, habiendo sido el acusado condenado a cumplir efectivamente su pena corporal, se le presume pobre, eximiéndosele con ello del pago de las costas de la causa.

Todas las penas impuestas, iniciarán su cumplimiento, una vez ejecutoriado este fallo.

VI. Ejecutoriado que sea el presente fallo, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, y en su oportunidad, remítase copia autorizada al Juzgado de Garantía de Santiago que corresponda.

Se previene que, el magistrado don **Marcelo Andrés Rojas Arenas**, concurriendo a las condenas por los delitos de receptación de vehículo motorizado y porte ilegal de arma de fuego, aunque no varía en nada en la determinación de las penas asignadas para cada uno de ellos, estuvo por considerar la atenuante de irreprochable conducta anterior del art.11 N°6 del Código Penal, al sentenciado, por carecer de anotaciones pretéritas como adulto en su Extracto de Filiación y Antecedentes. Además, porque su reproche penal anterior, dictada en causa **Rit N°11.064/2017** por el **2° Juzgado de Garantía de Santiago** con fecha **01 de junio de 2018**, condenándolo como autor del delito consumado de **Robo con Intimidación**, a la sanción de 541 de Libertad Asistida Especial, lo ha sido bajo el estatuto especial que regula la responsabilidad adolescente de la Ley 20.084. No pudiendo, en consecuencia, ser tomada en cuenta como adulto, conforme a la jurisprudencia mayoritaria de la Excm. Corte Suprema de Justicia.

Sentencia y prevención, redactadas por el Magistrado don **Marcelo Andrés Rojas Arenas**.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

RIT 375-2022

RUC 2000329302-6

Código Delito: (869)(10001)

SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, PRESIDIDA POR DON JORGE CANDIA BURGOS, E INTEGRADA POR LOS JUECES DOÑA ALEJANDRA ROSAS LAGOS Y DON MARCELO ANDRÉS ROJAS ARENAS. EL PRIMERO Y EL TERCERO EN CALIDAD DE TITULARES. LA SEGUNDA, EN CALIDAD DE SUPLENTE.